



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Diomar del Carmen Ruiz Ruiz
DEMANDADA:	Colpensiones
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
RADICADO Y LINK	05001-31-05-008-2022-00056-01 <a href="#">(212) 05001310500820220005601</a>

Medellín, a los veintiocho (28) días de junio de dos mil veintitrés (2023),

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante el archivo 08Sustitución Colpensiones -02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Fancy Anith Marín Gutiérrez con Tarjeta Profesional 226.035 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha indicada, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez, y Claudia Angélica Martínez Castillo, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Colpensiones y el grado de consulta en su favor, en el proceso ordinario laboral que le inició la señora **Diomar del Carmen Ruiz Ruiz**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

## 1.1 Pretensiones

La señora Diomar del Carmen Ruíz Ruiz demandó de Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la mesada adicional, el retroactivo los intereses moratorios y las costas del proceso; subsidiariamente reclamó la indexación.



## 1.2 Hechos

En respaldo de sus pretensiones manifestó que pidió el reconocimiento de la pensión de vejez en abril 20 de 2021 y lo reiteró en julio 19 de 2021, el día 10 de febrero de 2020 cumplió 57 años, estuvo afiliada al ISS (Instituto de Seguros Sociales) desde el 17/01/1979 (sic) con varios empleadores, y en calidad de independiente desde el 29/02/2020 (sic); pero su historia laboral registra inconsistencias en los períodos en que trabajó al servicio de SOTO DE CHAVARRÍA EUGENIA entre diciembre de 1998 y marzo de 2000 cuando evidencia anotaciones de «*pago aplicado a períodos anteriores*», «*cotizados 30 días y reportados 0 días*»; por ello solicitó en abril 27 de 2021 a Colpensiones corrección de su historia laboral;

## 1.3 Contestación Colpensiones

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptó los hechos relativos a la edad de la demandante, las solicitudes de corrección de historia laboral, y de reconocimiento de pensión de vejez, los demás los negó; propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez por el no cumplimiento de los requisitos legales, omisión de afiliación – deber de condicionar efectos del cálculo actuarial, riesgo de fraude, falta de legitimación en la causa por pasiva – Colpensiones, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación, inexistencia de obligación o improcedencia de pagar intereses moratorios.

## II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia el 29 de junio de 2022 en la que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de la demandante la pensión vitalicia de vejez de manera vitalicia a partir del 1 de agosto de 2020, en cuantía

equivalente a (1) smlmv, el retroactivo hasta junio de 2022 lo cuantificó en \$27.466.671, incluyendo una mesada adicional por año; autorizó los descuentos en salud; reconoció los intereses moratorios; impuso condena en costas y ordenó remitir el expediente para tramitar el grado jurisdiccional de Consulta.

Planteó el problema jurídico consistente en determinar si es procedente condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago en favor de la actora de la pensión de vejez, y si proceden los intereses moratorios.

Definido lo anterior, dirigió su estudio a establecer si la demandante reúne o no las semanas requeridas para la pensión, en ese ejercicio encontró que en la historia laboral aportada por Colpensiones se totalizan 1.260.86, las que son insuficientes para acceder al derecho, y lo fijó como el punto de discusión.

Examinó la historia laboral y encontró las siguientes inconsistencias: imputaciones de pago deuda presunta; aplicación de pagos a períodos anteriores; pago aplicado al período declarado; que las casillas de días reportados registra un total de 30, seguidamente en la casilla días cotizados se anota una cifra inferior como en el ciclo de enero de 1995 donde aparecen días reportados 30 y contabilizados 7; ciclo de diciembre de ese mismo año días reportados 30 y contabilizados 0, cotizados 1; ciclo junio de 1996 días reportados 30, cotizados 21; ciclo diciembre de 1998, días reportados 30, cotizados 21; ciclos enero a septiembre de 1999 en total 9 ciclos, días reportados 30 días, días cotizados 0.

Definido esto, procedió a contabilizar el número de semanas cotizadas con las planillas de pago por liquidación del ISS, a partir de tales probanzas tuvo por acreditado el pago de los ciclos de:

- enero a noviembre de 1999,
- octubre de 1999, días reportados 30, días contabilizados o tenidos en cuenta 22,
- noviembre y diciembre de 1999; enero y febrero de 2000, días reportados 30, contabilizados 20,
- marzo de 2000 días reportados 30 contabilizados 23.

Y de allí en adelante observó otros ciclos incompletos con cifras inferiores entre los días reportados a los días efectivamente cotizados, de donde concluyó que de conformidad con el Decreto 656 de 1999 en razón de la mora en el empleador y que Colpensiones no probó haber ejercido acción tendiente a cobrar los valores incompletos y/o con inconsistencias, y al tener en los ciclos reportados con inconsistencias asciende a 391 días, que corresponden a 55.86 semanas, ordenó su inclusión en la historia laboral y de ello obtuvo un total de 1.320.72 semanas en toda la vida, con lo que acreditó el cumplimiento de la actora de la densidad mínima de semanas para hacerse acreedora a la prestación de vejez; y la reconoció en cuantía de 1 smlmv, con derecho a 13 mesadas anuales.

El retroactivo lo liquidó desde 1 de agosto de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, por cuanto cumplió los 57 años de edad el día 10 de febrero de 2020, y la última cotización la efectuó para el ciclo de julio de 2020, y lo discriminó anualmente así:

- Año 2020 - 6 mesadas en cuantía de \$877.803 pesos, total \$5.266.818 pesos.
- Año 2021 - 13 mesadas en cuantía de \$908.526 pesos, total \$11.810.838 pesos.
- Año 2022 - 6 mesadas en cuantía de \$1.000.000 pesos, total \$6.000.000 pesos.
- Total, retroactivo \$23.077.656 pesos.

A partir del 1 de julio de 2022 Colpensiones deberá seguir reconociendo la pensión de vejez en cuantía de 1 smlmv, incluyendo la mesada adicional de diciembre y sin perjuicio de los incrementos legales sobre las mesadas pensionales liquidadas y las que se sigan causando, con los descuentos de salud. Y condenó a Colpensiones al reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de vejez a la actora, reclamada el 20 de abril de 2021.

### III. RECURSO DE APELACIÓN

**Según Colpensiones** no se demostró la mora del empleador Soto de Chavarría Eugenia o el pago deficitario de aportes, eso le impediría computar el cálculo actuarial y cobrarlo; el juzgado no condenó al empleador al pago de la liquidación del cálculo actuarial por las semanas que exceden las 1.264 reportadas en la historia laboral, e insistió en que la demandante no reúne el número mínimo de semanas requeridas para obtener la pensión de vejez según la Ley 797 de 2003.

Señaló que previamente a validar y cargar los tiempos cotizados en forma deficitaria es necesario que el empleador incumplido efectúe el pago Decreto 2011 de septiembre de 2012, luego de esto es cuando puede proceder al estudio de los requisitos para el reconocimiento y pago de pensión de vejez a la parte actora.

## **IV. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

### **2.1 Alegatos demandante**

Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó se confirme la decisión de primera instancia, en virtud del precedente jurisprudencial tanto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional que respecto a la mora por parte del empleador se ha trazado.

### **2.3 Alegatos Colpensiones**

La apoderada de Colpensiones presentó sus alegatos de segunda instancia de manera extemporánea, por lo que no se considerarán.

## **IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **5.1. COMPETENCIA.**

Conoce la Sala del recurso de apelación y del grado de consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en el artículo 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

### **5.2. PROBLEMA JURÍDICO.**

Esta Sala se ocupará de analizar, si en el caso sometido a estudio, se acreditaron los presupuestos de ley para reconocer la pensión de vejez a la actora, debiendo establecer si el juzgador de primera instancia se equivocó o no al relevar a la demandante de las consecuencias de la mora de sus empleadores, y considerar que Colpensiones debió conceder validez a las 55,86 semanas pagadas de manera incompleta o tardía.

### 5.3. HECHOS RELEVANTES PROBADOS

No son hechos discutidos la fecha de nacimiento de la demandante, su vinculación al RPM desde agosto de 1993, las 1.264.86 semanas reportadas válidamente en su historia laboral hasta el 31 de julio de 2020, así como que son insuficientes para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.



### 5.4. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ:

El tema del disfrute de la pensión de vejez, de acuerdo a la fecha de nacimiento de la demandante, debe ser analizado a partir de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que regula los requisitos así:

“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

**PARÁGRAFO 1o.** Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones; “

Con la copia de la cédula de ciudadanía quedó demostrado que la demandante nació el 10/02/1963, por lo que cumplió el requisito de edad para obtener el reconocimiento pensional el 10/02/2020 (folio 3 archivo 02PoderAnexos), y según su historia laboral actualizada al 04/02/2022, en ese momento reunía 1.264.86 semanas (archivo 9RespuestaColpensiones.zip), lo que significa que aun cuando tenía la edad exigida, le faltaban las semanas -1.300- para obtener el derecho pensional.

### 5.5. EFECTOS DE LA MORA PATRONAL

El artículo 24 de la Ley 100 de 1993 establece que corresponde a las entidades administradoras de los regímenes pensionales promover las acciones de cobro ante el incumplimiento de las obligaciones del empleador, y según el artículo 13 del Decreto 1161

de 1994, ello deberá realizarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes «a la fecha en la cual se entró en mora».

Asimismo, el artículo 8. ° ibidem prevé que dichas entidades están en la obligación de verificar la correspondencia de los montos aportados con las exigencias legales e informar a los depositantes las inconsistencias que se adviertan con el fin de que efectúen las correcciones pertinentes, en concordancia con las disposiciones referentes al término para los requerimientos, la constitución en mora y la elaboración de la liquidación para iniciar los trámites del proceso ejecutivo.

Es oportuno destacar que desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, la Sala de Casación laboral ha indicado de manera reiterada y pacífica que el afiliado que tenga la condición de trabajador subordinado causa la cotización con la prestación efectiva del servicio, y si el empleador no cumple la obligación de pago oportuno y la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir la obligación de las pensiones que se generen para el asegurado o los beneficiarios, siendo necesario acreditar que en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092- 2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018).

Como se vio, de antaño la postura de la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha expresado que la mora en el pago de los aportes no puede ser imputada al trabajador afiliado, sino al empleador y/o a la administradora del sistema, y en sentencia CSJ SL1355-2019 determinó pautas a tener en cuenta por el juez de conocimiento cuando se avizore mora patronal, así:

*“Para dar respuesta al cargo, conviene recordar que esta Corporación, de manera reiterada y pacífica, ha considerado que el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo. Así, la actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado.*

*Así mismo, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 34270, 28 oct.2008, la Sala explicó que –en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral-, en la CSJ SL8082-2015, señaló que – los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio- y en la CSJ SL8082-2015, señaló que -los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio-, y en la sentencia CSJ SL759-2018 sostuvo que –la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son*

*consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras-*

*Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un colorario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y están dirigidos a garantizar al asalariado un ingreso económico periódico, tras largos años de servicio que han redundado en un desgaste físico natural. De allí que, precisamente, para que pueda hablarse de -mora patronal- es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, si bien regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria. Dicho de otro modo: la mora del empleador debe tener sustento en una relación de trabajo real." (negrillas y subrayas de la sala).*



En ese mismo sentido para convalidar aportes por inconsistencia o la mora, si bien la corte ha trazado su línea jurisprudencial a fin de establecer como presupuesto para la imputación de estos pagos, se debe demostrar la existencia del vínculo laboral como se dijo en la sentencia SL1506-2021:

*manera pacífica y reiterada, que para convalidar los aportes en mora del empleador cuando la administradora de pensiones no activa los mecanismos de cobro para el recaudo de los aportes, se requiere la comprobación de la existencia de la relación laboral durante el período en que el trabajador dice haber prestado sus servicios, aspecto que pasó por alto el Tribunal con relación a los dos períodos validados con la empleadora Isabel Montaña de Santander, a pesar de que en uno de ellos en la historia laboral aparece la anotación 'no registra la relación laboral en afiliación para este pago' para los ciclos de 1995, y en el otro, no aparece demostrada la afiliación para el año 1994, lo que con mayor razón hace necesaria la verificación del vínculo laboral.*

*En el sentido indicado, en la sentencia CSJ SL 3692-2020, la Sala adocrinó:*

*Sin embargo, lo dicho en precedencia debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el literal l) del artículo 13 de la Ley 100, así como con lo establecido por los artículos 15 y 17 de ese mismo cuerpo normativo, que respectivamente señalan:*

#### ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

*l. En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo;*

*ARTÍCULO 15. AFILIADOS. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:*

*1. En forma obligatoria: <Ver Jurisprudencia Vigencia> Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.*

*ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.*

*Con sustento en las anteriores normas, es que la Sala ha sostenido que las cotizaciones de un asegurado al sistema se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio o en otras palabras la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional. Así, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL514-2020, que reiteró lo dicho en la providencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, ...":*

En el caso sometido a examen el aspecto nuclear se concreta en establecer si Colpensiones realizó correctamente la imputación de pagos por períodos en mora o

cuando el valor cancelado fue inferior al del smlmv, que ocasionó la diferencia registrada en la historia laboral entre los días reportados y los efectivamente cotizados a la actora, en tanto en algunos períodos se colocó en la casilla de observaciones que el pago fue *aplicado a períodos anteriores*.

Así sucedió en los ciclos de enero a septiembre del año 1999, donde discrimina el valor recibido por concepto de cotización, así como el valor en mora, y señala que el pago fue aplicado a períodos anteriores, sin que se indique a qué períodos fueron aplicados; siendo estos los períodos que no incluye en la historia laboral. Y con los ciclos del período comprendido entre junio de 1996, diciembre de 1998, octubre a diciembre de 1999, enero a marzo de 2000, febrero y septiembre de 2002, enero a noviembre de 2004, noviembre de 2008, y enero a diciembre de 2010, también recibió el pago de la cotización, señala que el pago fue aplicado al período declarado, pero señala el valor en mora de la cotización y le resta días de cotización, y descontando días por estos períodos de la historia laboral. Períodos y días que no tuvo en cuenta al momento de contabilizar las semanas, cuando existe constancia de la vigencia de la afiliación de la actora a nombre de la empleadora Eugenia Soto de Chavarría y Jorge Enrique Echavarría Restrepo, ya no reportó novedad por retiro en ninguno de esos ciclos.

De acuerdo a lo adocinado por la jurisprudencia de la – Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Fondo de Pensiones debe probar que adelantó infructuosamente el cobro coactivo de las cotizaciones ante el empleador, por los periodos reportados en mora o que los aplicó a un período anterior, so pena de que los mismos deban ser tenidos en cuenta como válidamente cotizados, como se ha expresado en sentencias SL069-2018, SL6030 – 2017.

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que no era posible validar los aportes porque la demandante no demostró la existencia de la relación laboral con los empleadores aportantes; sin embargo, la historia laboral incorporada en el expediente administrativo da cuenta que, en los períodos con inconsistencias la afiliación estaba activa, el empleador realizó los pagos y Colpensiones los recibió sin objeción, por lo que se allanó a la mora.

Así, las razones expuestas por Colpensiones contradicen lo que muestran las pruebas al no existir omisión de afiliación o falta de pago en nombre de la afiliada, sino de aportes deficitarios.

A la misma conclusión se arriba al observar que en abril de 2021, Colpensiones recibió la solicitud de corrección de historia laboral elevada por la demandante, le asignó el radicado 2021\_4823528, y el 14 de mayo siguiente en respuesta al trámite –*actualización de datos solicitud de corrección historia laboral*- le notificó: «Nos permitimos informar que hemos **revisado y corregido las inconsistencias encontradas en los ciclos cotizados**, los cuales ya se encuentran acreditados con el empleador que se refleja en su historia laboral, de acuerdo a la información reportada en su momento por dicho empleador».

La prueba anterior es determinante para inferir que Colpensiones al momento en que tuvo conocimiento de las inconsistencias en la historia laboral de la demandante, que no desconoció ni informó inexistencia de un vínculo laboral con los empleadores Eugenia Soto de Chavarría y Jorge Enrique Echavarría Restrepo, por el contrario, asumió la carga de corregir las inconsistencias; lo que a la fecha de presentación de la demanda no había cumplido. De esa manera, resulta palmario que en el trámite de la solicitud de corrección de la historia laboral Colpensiones admitió la relación laboral, ahora para abstenerse de reconocer la pensión, no la puede desconocer.

Se debe recordar que, en este tipo de controversias, excepcionalmente resulta necesario exigir la prueba de la existencia de la relación laboral, cuando se presenten serias inquietudes acerca de la validez de ciertos períodos, porque no esté demostrada la continuidad o la existencia de la relación laboral que constituya el soporte efectivo de esas cotizaciones, como lo explicó la CSJ en sentencia SL918-2022:

De esta manera, cuando se presentan serias inquietudes acerca de la validez de ciertos periodos, ya sea, por ejemplo, porque existen novedades de retiro o porque no esté muy clara la continuidad o permanencia del afiliado, resulta necesario exigir la prueba de la existencia de una relación laboral que le dé soporte efectivo a dichas cotizaciones, para así evitar fraudes al sistema de seguridad social integral o negar automáticamente el derecho (CSJ SL3490-2019).

Sin embargo, para la Corte, esta exigencia es excepcional y resulta predicable únicamente en los casos en que, como se dijo, existan serias y fundadas dudas sobre la vigencia de un nexo contractual de trabajo, pues no en todos los eventos en que se examine una historia laboral, de cara a efectuar la contabilización de las semanas cotizadas, se debe verificar la existencia de una relación laboral por cada periodo aportado o dejado de cotizar (CSJ SL3285-2021)".

A Colpensiones no le está dada la facultad de variar la información consignada tanto en la historia laboral como en el expediente administrativo de la señora Carmen Ruiz, sin aducir razones que justifiquen la modificación, es que esa administradora en virtud del principio de confianza legítima debe resguardar y verificar la información que registre en las historias laborales de los afiliados, tal como lo ha señalado la SCL en sentencia SL1116-2022:

Conforme con lo anterior, la Sala reitera que las entidades administradoras de pensiones tienen la obligación de custodiar las historias laborales de los afiliados y deben tener especial cuidado en la información que certifican al emitir estos documentos por intermedio de sus plataformas digitales o físicas. Y con mayor razón deben procurarlo al expedir los actos administrativos que, como se explicó, por regla general se presumen legales, de modo que la justificación que expongan para modificar lo certificado a través de otras actuaciones administrativas debe ser razonable y válida.

Es así como se exige una obligación de custodia conservación y guarda de la información, garantizar un contenido confiable, manejo transparente y dar explicaciones razonables frente a cualquier cambio en los archivos o bases de datos.

En relación con el valor de la información consignada en las historias laborales, la expectativa legítima en el trabajador que, con base en tal información, solicita el reconocimiento de alguna prestación y la violación de los derechos fundamentales que su alteración puede ocasionar, en tanto puede crear expectativas de derechos ya que constituyen la “*prueba principal o fehaciente*” de los aportes realizados por el trabajador a lo largo de su vida laboral y permiten acreditar los requisitos exigidos por el ordenamiento para acceder a una pensión, la Corte Constitucional la estudió en sentencia SU045-2021 en la que precisó:

Uno de los requisitos indispensables para acceder a la pensión de vejez -en el régimen de prima media o para la pensión mínima dentro del régimen de ahorro individual- es el número de semanas cotizadas al sistema, cuyo umbral debe ser superado para que a la persona le sea reconocida la prestación. Y es aquí donde cobra especial relevancia la *historia laboral*, entendida como un documento emitido por las administradoras de pensiones -públicas o privadas- que se nutre a partir de la información sobre los aportes de cada trabajador. En ella se relaciona el tiempo laborado, el empleador -si lo hay- y el monto cotizado. También se consignan datos específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días reportados e igualmente puede contener anotaciones u observaciones sobre los períodos de aportes.

La jurisprudencia ha considerado que este documento tiene relevancia constitucional pues involucra la protección de derechos fundamentales y permite el reconocimiento de prestaciones. Lo que explica su doble faceta. De una parte, la historia laboral es valiosa en sí misma porque contiene información laboral sobre el trabajador y su empleador. Por otro lado, es un instrumento para el ejercicio de otros derechos, pues de acuerdo con los datos que contiene se reconocen o niegan prestaciones sociales y se generan obligaciones entre los empleadores, los trabajadores y las administradoras de pensiones.

Es por ello que “*la información que reposa en las historias puede crear expectativas de derechos y su alteración puede vulnerarlos.*”<sup>1</sup> Es más, los datos allí incluidos constituyen la “*prueba principal o fehaciente*” de los aportes realizados por el trabajador a lo largo de su vida laboral y permiten acreditar los requisitos exigidos por el ordenamiento para acceder a una pensión.<sup>2</sup> Por supuesto, esto genera una “*expectativa legítima*” en el trabajador que, con base en tal información, solicita el reconocimiento de alguna prestación.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Ibidem*.

<sup>2</sup> Sentencia T-491 de 2020. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Ver también, Sentencia T-200A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

<sup>3</sup> Sentencia T-379 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. En el mismo sentido, ver Sentencia T-463 de 2016. M.P.

De ahí que la historia laboral genere obligaciones en las demás partes que integran el sistema laboral y de la seguridad social, en función de proteger al eslabón más débil: el trabajador. Ha explicado la Corte que *“tanto el empleador, como las administradoras de pensiones, son responsables de almacenar correctamente la información que reposa en su poder sobre la historia laboral de una persona. Ello, de manera que los ciudadanos interesados puedan acceder oportunamente a esta, presentar correcciones o solicitar certificaciones para realizar trámites legales.”*<sup>4</sup> En el caso del empleador, esta Corporación concluyó que, del ordenamiento jurídico y de la protección que merecen los trabajadores, se deriva para este una obligación indefinida en el tiempo de conservar los registros laborales, así como el deber de colaborar en la reconstrucción del historial cuando por alguna razón esto resulte necesario ante la pérdida o deterioro de los registros.<sup>5</sup>

Frente a las administradoras de pensiones -objeto de análisis en el presente caso-, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de forma reiterada que existe una serie de deberes en cabeza de tales entidades -públicas y privadas- que supone una especial diligencia en el manejo de la información. De ahí que la carga de la prueba frente a las inconsistencias o errores que surjan recaen sobre dichas entidades, sin que las consecuencias desfavorables puedan trasladarse sin más a los afiliados”.

En consecuencia, al estar demostrado que Colpensiones no ejerció las acciones tendientes a notificar a los empleadores de la inconsistencia en el pago, las acciones de cobro, o de la corrección de la historia laboral de la demandante, es imposible admitir razonablemente que con sus manifestaciones relacionadas con la inexistencia de la relación laboral de la demandante, que dejarían sin sustento las cotizaciones, podría modificar la información contenida en la historia laboral o en el expediente administrativo.

Tampoco luce válida la afirmación de Colpensiones si se contrasta con las planillas de pago- obrantes en el archivo 13PlanillasDePago, que evidencian los pagos a seguridad social efectuados por la empleadora SOTO DE CHAVARRÍA EU y ECHAVARRÍA RESTREPO, quienes figuran en la historia laboral de la demandante, como empleadores y aportantes; la señora Soto de Chavarría Eugenia desde el período 01/02/1995 hasta el 30/09/2007, y Echavarría Restrepo desde el período 01/02/2012 hasta el 01/02/201, donde consta la firma de los empleadores en las planillas, ello corrobora que sí hubo un pago efectivo en la contraprestación del servicio.

Se insiste, la solicitud de corrección de historia laboral presentada por la demandante en abril 27 de 2021, y que Colpensiones le respondió el 14/05/2021 informándole que le actualizarían los datos de la historia laboral, es prueba de que esa entidad no desconoció la relación laboral entre la actora y SOTO DE CHAVARRÍA EUGENIA Y ECHAVARRÍA RESTREPO, ya que de su respuesta se infiere que no controvertió su existencia, por el

---

Gloria Stella Ortiz Delgado.

<sup>4</sup> Sentencia SU-182 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. SPV y AV. Carlos Bernal Pulido. AV. Alejandro Linares Cantillo.

<sup>5</sup> Sentencia T-470 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

contrario le informo a la afiliada de unas acciones de corrección en su historia laboral que a la fecha no se registran.

En consecuencia el quid del asunto consiste entonces en las consecuencias de la imputación de pagos para la demandante quien en su condición de afiliada no es quien paga los aportes y que es Colpensiones como administradora del régimen de prima media quien recibe y verifica la validez de los aportes o cotizaciones a ellos pagadas, y quienes cuentan con todos los mecanismos administrativos y legales para corroborar que los pagos correspondan y sean suficientes y de no serlo, en virtud del debido proceso, debió activar las acciones tendientes a esclarecer posibles inconsistencias en la acreditación de un vínculo laboral, que nunca invocó.

Colofón de lo antes expuesto, no hay duda que la historia laboral actualizada aportada, subsisten las anotaciones de mora en la totalidad del pago de los aportes y de pagos aplicados a períodos anteriores, aun cuando de la verificación de la fecha de cancelación de los aportes hoy objeto de discusión, fueron pagados dentro del término y la misma nada informa respecto del por qué se imputa a períodos anteriores, y en los ciclos reportados con 30 días le cotizan días inferiores, como se muestra en el cuadro a continuación donde se extrajeron de ese documento los ciclos con inconsistencias:

Semanas/Tiempos de servicio con cotizaciones no reportadas aplicadas a períodos anteriores								
Empleador	Período	IBC reportado	Valor de cotización pagada	Valor de cotización en mora	Día de reportados	Días cotizados	Observación Colpensiones	Días no reconocidos por mora
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199901	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199902	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199903	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199904	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199905	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199906	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199907	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30

Rdo. 05-001-31-05-008-2022-00056-01  
Rad. interno 2022-212  
Dte. Diomar del Carmen Ruiz Ruiz  
Dda. Colpensiones

SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199908	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199909	\$ 101.913	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	0	Pago aplicado a periodos anteriores	30
Total, días								270
Subtotal semanas que deben ser incluidas en historia laboral:								38,57142857

Ciclos con reporte de cotizaciones inferiores a 30 días								
Empleador	Período	IBC reportado	Valor de cotización pagada	Valor de cotización en mora	Día cotizados	Días reportados	Observación	Días no reconocidos por mora
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199606	\$ 100.000	\$ 13.500	-\$ 5.687	30	21	Pago aplicado al periodo declarado	9
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199812	\$ 153.400	\$ 20.709	-\$ 6.807	30	21	Pago aplicado al periodo declarado	9
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199910	\$ 170.000	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	22	Pago aplicado al periodo declarado	8
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199911	\$ 170.000	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	22	Pago aplicado al periodo declarado	8
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	199912	\$ 170.000	\$ 22.950	-\$ 8.972	30	22	Pago aplicado al periodo declarado	8
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200001	\$ 170.000	\$ 22.950	-\$ 12.164	30	20	Pago aplicado al periodo declarado	10
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200002	\$ 170.000	\$ 22.950	-\$ 12.164	30	20	Pago aplicado al periodo declarado	10
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200003	\$ 200.000	\$ 27.000	-\$ 8.114	30	23	Pago aplicado al periodo declarado	7
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200202	\$ 220.000	\$ 29.700	-\$ 12.015	30	21	Pago aplicado al periodo declarado	9
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200209	\$ 238.000	\$ 32.100	-\$ 9.615	30	23	Pago aplicado al periodo declarado	7
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200401	\$ 332.000	\$ 44.800	-\$ 3.340	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200402	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200403	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200404	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200405	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200406	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200407	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2

SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200408	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200409	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200410	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200411	\$ 384.000	\$ 51.900	-\$ 3.780	30	28	Pago aplicado al periodo declarado	2
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200811	\$ 461.500	\$ 72.300	-\$ 1.500	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200901	\$ 497.000	\$ 77.929	-\$ 1.591	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200902	\$ 497.000	\$ 77.929	-\$ 1.591	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200903	\$ 497.000	\$ 77.578	-\$ 1.942	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200904	\$ 497.000	\$ 77.883	-\$ 1.637	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200905	\$ 497.000	\$ 77.943	-\$ 1.577	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200906	\$ 497.000	\$ 77.866	-\$ 1.654	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200907	\$ 497.000	\$ 77.836	-\$ 1.684	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200908	\$ 497.000	\$ 78.056	-\$ 1.464	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
SOTO DE CHAVARRIA EUGENIA	200909	\$ 497.000	\$ 77.828	\$ 0	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
ECHAVARRÍA RESTREPO JORGE ENRIQUE	200910	\$ 600.000	\$ 94.164	-\$ 1.836	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
ECHAVARRÍA RESTREPO JORGE ENRIQUE	200912	\$ 600.000	\$ 93.991	-\$ 2.009	30	29	Pago aplicado al periodo declarado	1
Total, días								119
Subtotal semanas que deben ser incluidas en historia laboral:								17

Número total de semanas debidamente cotizadas a incluir en la historia laboral	55,5714286
--	------------

Una vez efectuada la revisión de los ciclos, los cálculos para determinar los días no reportados en la historia laboral de la demandante, consignados en la casilla resaltada de amarillo, arroja un total de 389 días cotizados, para 55.571 semanas, que tal como lo dispuso la juez de instancia, en atención a la regla jurisprudencial, deberá incluirse en la historia laboral de la demandante y que sumadas a las 1.264.86 registradas, arroja un total de 1.320.44 semanas cotizadas a la fecha 31/07/2020.

Así las cosas, el análisis de las pruebas aportadas al proceso realizado en la sentencia de primera instancia es acertado y abren paso a confirmar la decisión de incorporar en la historia laboral los tiempos en los cuales aparece la presunta mora patronal, por haberse acreditado que los empleadores SOTO DE CHAVARRÍA EUGENIA y ECHEVERRÍA RESTREPO JORGE efectuaron el pago de los aportes en favor de la actora, y que aunque incompletos en el monto total pagado por ciclo, no hubo acción de cobro por parte de Colpensiones, y la situación de mora en el pago de aportes, al estar reportados en los meses de junio y septiembre de 1996, enero y febrero de 1997 y enero de 1999, deuda presunta y pagos aplicados a períodos anteriores, lo que da lugar a que se le otorgue el derecho a la pensión de vejez, con la inclusión que se hizo de 55,86 semanas, lo que permite acreditar a la fecha que la demandante cotizó 1.320.44 semanas al -20-07-2020, al cumplir con los requisitos de edad y el mínimo de semanas requerido.

En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado por las razones aquí expuestas a fin de que se ordene en a Colpensiones reconocer y pagar en favor de la actora la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual vigente, a partir del 1 de agosto de 2020, fecha de la última cotización en razón a que a partir de allí se entiende que la demandante expresó tácitamente su deseo de no continuar amparada con los riesgos de IVM en el Sistema General de Seguridad Social, sin que sea necesaria la manifestación expresa en ese sentido, pues sus actos así lo dan a entender (Ver CSJ SL5541-2019 y CSJ SL354-2021).

#### **4.7. PRESCRIPCIÓN.**

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la demanda de la referencia se impetró con el propósito de obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, de la cual se predica la imprescriptibilidad, ver al respecto sentencia SL1421 de 2019. En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Sin costas procesales de Segunda Instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**I. RESUELVE:**

17

**PRIMERO: Confirmar** la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de junio de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora DIOMAR DEL CARMEN RUIZ RUIZ en contra de COLPENSIONES; conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia; con la corrección en el numeral segundo de que la fecha de causación del derecho es a partir del 1 de julio de 2020, como se indicó en la audiencia.

**SEGUNDO:** Sin **costas procesales** de segunda instancia por haber conocido en grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,

  
CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

  
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ